

### Comunidad de Madrid

# El PP se reparte los papeles de los recortes

EL ENORME destrozo de los recortes de Esperanza Aguirre, impuestos en la educación pública en julio del año pasado, se agudiza y se hace crónico con los nuevos recortes que el Gobierno impone en todo el Estado y a las enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

CCOO ha presentado un informe, fundado en el análisis comparativo de datos reales referidos a los cursos 2010/2011 y 2011/2012, y recopilados durante el mes de marzo de 2012, en 37 IES de las cinco Áreas Territoriales de la Comunidad de Madrid. La tabulación de estos datos describe los graves perjuicios que esos recortes suponen en el ejercicio del derecho a la educación, en el servicio educativo, en el empleo y en las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.

Las perjudiciales consecuencias ya verificadas en la Secundaria, se amplían en número y gravedad –tanto en esta etapa como en todas las demás– con los recortes anunciados por el Ministerio, de los que enunciamos solo dos: aumento del 20% de la ratio máxima alumno/aula, el incremento entre el 50% y el 70% de las tasas universitarias, que perjudican a todas las enseñanzas y a los centros sostenidos con fondos públicos y a las personas con menos recursos económicos y más dificultades para el aprendizaje. Así, la ampliación de la ratio alumno/aula en un 20%, se traduce en un hacinamiento en las aulas con dimensiones ajustadas a las ratio máximas legales, 25 alumnos/as en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria.

Este hacinamiento de alumnado y la también anunciada ampliación de la jornada inciden negativamente en las condiciones de trabajo del profesorado y disminuyen la cantidad de trabajadores en el sector. Aproximadamente de cada cuatro unidades/grupos con las actuales ratio, se podrá reducir una con la ampliación de ratio decretada, lo que significa entre tres y seis docentes menos por cada centro y la ampliación de jornada puede añadir otros cuatro profesores menos por centros. Extrapolando los datos del actual curso, si se aplicasen los recortes anunciados en el próximo, se sumarían a los ya despedidos o no contratados en este año en la enseñanza pública no universitaria, por lo que alrededor de 6.000 docentes perderían su trabajo.